

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD

Bogotá D.C, Tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Tutela
2023-00099

I. ASUNTO:

Dentro de la oportunidad prevista en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, procede el Juzgado a resolver la acción de tutela instaurada por **LEVINSON OLMEDO COSSIO RENTENRIA** en contra del **EJÉRCITO NACIONAL, DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL**

II. ANTECEDENTES:

2.1. HECHOS (SÍNTESIS):

2.1.1.- Manifiesta la accionante que actualmente se encuentra vinculado al Ejército Nacional y en los últimos meses ha padecido quebrantos de salud por lo que requiere una nueva cita con medicina general con el fin de que lo remitan a los especialistas correspondientes.

2.1.2.- Sostuvo que, si bien lo han atendido con antelación, lo cierto es que debe continuar con un tratamiento adecuado, suministro de medicamentos y ser remitido a especialistas, motivo por el cual ha intentado solicitar una cita con medicina general y siempre le han indicado que o hay agenda por el momento.

2.2. PETICIÓN:

Solicita que se ordene a sanidad Militar se le asigne una cita con medicina general.

III. ACTUACIÓN PROCESAL:

Mediante auto del 20 de febrero de 2023 se admitió la acción constitucional (archivo digital 007), en el que se ordenó, notificar a las partes, y solicitarle a la accionada contestar el libelo dentro del término de dos (2) días.

3.1. RESPUESTA:

HOSPITAL MILITAR (archivo digital 010): Se opone a la prosperidad de la acción de tutela de la referencia, argumentando:

es importante explicar los trámites administrativos propios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, lo cual se fundamenta en la Ley 1438 del 19

de Enero de 2011, la Resolución 4331 del 16 de Diciembre del 2012, ya que es de obligatorio cumplimiento, el sistema de referencia con su respectiva autorización del servicio médico referenciado así como para el prestador de servicios es de obligatoriedad cumplir con la contrareferencia para que el usuario pueda acceder nuevamente al mismo, así como el posterior direccionamiento del usuario dependiendo del nivel de complejidad del servicio médico solicitado, del portafolio de servicios y de la capacidad resolutoria de los Establecimientos de Sanidad Militar.

Adicionalmente las ordenes médicas, obligatoriamente deben tener el sello de autorización emitido por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, Entidad a la cual se encuentra adscrito el Accionante, quienes por medio de sus oficinas auditorias remiten al mismo a este Centro Hospitalario o a sus distintos Dispensarios Médicos, ello según el grado de complejidad de la patología que padece el paciente.

También comunico que unas de tantas Oficinas Auditoras de las Direcciones de Sanidad del Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea, no hacen parte de la estructura administrativa del Hospital Militar Central, sino de la Dirección General de Sanidad Militar y las Direcciones de Sanidad de Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional.

Seguidamente, resulta sustancial aclarar a su Despacho que es la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional en calidad de EPS, son quienes autorizan la atención médica del paciente en el Hospital Militar Central como IPS tal como está descrito en el Decreto 1795 de 2000, Artículo 16..."

Teniendo en cuenta lo anterior, el Hospital Militar Central, NO es el competente para autorizar servicios médicos como citas y exámenes y NO puede asignar citas médicas sin la respectiva autorización de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, en el caso presente, teniendo en cuenta lo indicado en párrafos anteriores.

IV. CONSIDERACIONES:

4.1. COMPETENCIA:

Este Juzgado es competente para conocer de la acción de tutela con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1.991.

4.2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN:

La acción de tutela se instituyó por el constituyente de 1991, en el artículo 86 de la Constitución Política, con la finalidad exclusiva de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de las personas cuando estos sean violados o puestos en peligro por acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, estos últimos, en los casos expresamente señalados por la ley.

Sin embargo, el acceso a este procedimiento preferente y sumario es procedente siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial que sea idóneo, apreciado en concreto, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por lo mismo, no es alternativo sino residual.

Según lo previsto en el numeral 2º del Decreto 306 de 1992 (reglamentario del Decreto 2591 de 1991), dicha acción protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, por ende, no puede emplearse, para hacer respetar derechos que sólo tengan rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.

4.4. DERECHO A LA SALUD

El derecho a la seguridad social, como el derecho a la salud, tienen el carácter de fundamental y dan lugar a la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, cuando los destinatarios son personas que gozan de protección constitucional reforzada, cuando se reclaman servicios o medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud o cuando su desconocimiento ponga en peligro otros derechos como la vida, la dignidad humana, el trabajo o la libre determinación, aspecto que ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional.

Al respecto la sentencia T–022 de 2011 con ponencia del Magistrado Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA sintetiza la posición de la Corte Constitucional así:“ (...) *El derecho fundamental a la salud, ha sido definido como “la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser (...).”*

“ (...) Así, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido la procedencia del amparo por vía de tutela de este derecho cuando se verifica alguno de los siguientes puntos: “(i) falta de reconocimiento de prestaciones incluidas en los planes obligatorios, siempre que su negativa no se haya fundamentado en un criterio estrictamente médico y, (ii) falta de reconocimiento de prestaciones excluidas de los planes obligatorios, en situaciones en que pese a la necesidad de garantizarlas de manera urgente, las personas no acceden a ellas a causa de la incapacidad económica para asumirlas. En estos eventos, el contenido del derecho a la salud no puede ser identificado con las prestaciones de los planes obligatorios (...).”

“ (...) La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado las condiciones en las cuales la vulneración al derecho a acceder a un servicio fundamental para la salud es tutelable, en los siguientes términos: una persona inscrita en el régimen de salud contributivo o subsidiado tiene derecho a reclamar mediante acción de tutela la prestación de un servicio de salud cuando éste (i) está contemplado por el Plan Obligatorio de Salud (POS o POS-S), (ii) fue ordenado por su médico tratante adscrito a la entidad prestadora del servicio de salud correspondiente, (iii) es necesario para conservar su salud, su vida, su dignidad, su integridad, o algún otro derecho fundamental y (iv) fue solicitado previamente a la entidad encargada de prestarle el servicio de salud, la cual o se ha negado o se ha demorado injustificadamente en cumplir su deber. En otras palabras, toda persona tiene derecho a acceder a los servicios que requiera, contemplados dentro del plan de servicios del régimen que la protege. (...).”

5. DEL ASUNTO EN CONCRETO Y SOLUCIÓN.

En el caso examinado, se tiene que el accionante solicita se ordene a la Dirección de Sanidad del ejército Nacional le asigne una cita por medicina general lo más pronto posible como quiera que a la fecha de la presentación de esta acción constitucional

no había sido asignada.

PRESUNCIÓN DE VERACIDAD EN MATERIA DE TUTELA CUANDO LA AUTORIDAD DEMANDADA NO RINDE EL INFORME SOLICITADO POR EL JUEZ CONSTITUCIONAL.

El artículo 20 del Decreto-Ley 2591 de 1991, consagra la presunción de veracidad como un instrumento para sancionar el desinterés o negligencia de la autoridad pública o el particular contra quien se ha interpuesto la acción de tutela, en aquellos eventos en los que el juez requiere cierta información (art. 19 Decreto 2591 de 1991) y aquella no es allegada dentro del plazo respectivo o simplemente no llega, dicha negligencia tiene como consecuencia que los hechos narrados por el accionante en la demanda de tutela sean tenidos como ciertos.¹

Teniendo en cuenta que como se hizo mención en precedencia, la entidad accionada fue debidamente notificada y guardó silencio, motivo por el cual se tendrán por ciertos los hechos fundamento de la acción de tutela.

En el caso que nos ocupa, se encuentra acreditado que el accionante ha presentado algunos quebrantos de salud, motivo por el cual el 30 de agosto de 2022 asistió a cita con medicina general y allí el médico tratante le formuló varios medicamentos, sin embargo, a la fecha de la presentación de esta acción constitucional no ha sido posible la asignación de una nueva cita médica por medicina general, a pesar que no se trata de un médico especialista, argumentando que por el paso del tiempo su estado de salud está empeorando.

Por lo anterior, y como quiera que la entidad accionada guardó silencio, este despacho tendrá por cierto los hechos esbozados en la demanda tutelar, y en aras de salvaguardar los derechos fundamentales del accionante, en especial su derecho a la salud, se concederá el amparo constitucional solicitado por **LEVINSON OLMEDO COSSIO RENTENRIA**, ordenando a la **DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL**, proceda en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, a asignar una cita por medicina general a través de la red de prestadores de servicios de salud.

Así, ante la evidente vulneración del derecho a la salud incoada por el accionante se dispondrá a acceder la acción de tutela instaurada contra la **DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL**, desvinculando al Ministerio de Defensa y al Hospital Militar atendiendo que dichas entidades no han vulnerado ningún derecho al aquí accionante.

En mérito de lo expuesto, EL JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTA D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN EL NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

R E S U E L V E:

PRIMERO: ACCEDER LA ACCIÓN DE TUTELA promovida por **LEVINSON OLMEDO COSSIO RENTENRIA**, contra la **DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL**, por encontrar vulnerados los derechos fundamentales alegados.

SEGUNDO: ORDENAR a la **DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL**, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a asignar al señor **LEVINSON OLMEDO COSSIO RENTENRIA** una cita por

¹Al respecto se pueden ver las Sentencias T-644 de 2003, T-911 de 2003, T-1074 de 2003, T-1213 de 2005, entre otras.

medicina general a través de la red de prestadores de servicios de salud que designe.

TERCERO: DESVINCULAR de la presente acción constitucional al Ministerio de Defensa y al Hospital Militar, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

CUARTO: ORDENAR que por Secretaría se notifique esta sentencia a las partes en la forma más expedita y eficaz.

QUINTO: DISPONER que, si esta sentencia no es impugnada, se remita el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión.

CÚMPLASE



CÉSAR ENRIQUE OSORIO ORTÍZ
JUEZ

AP